Por último, J. De Seabra López menciona que, a partir del 18 de abril de 1970, el Centro de Información del Ministerio de Justicia tiene a su cargo la ejecución de trabajos realizados a través de computadoras, proporcionando datos que favorecen la fácil y rápida identificación personal. También se promoverá la extensión de estos nuevos servicios a otras ciudades y se desea que la información que se posee sirva para beneficio de Portugal y de los países que la soliciten.—Xóchitl GARMENDIA CEDILLO.

DERECHO PROCESAL

AYAN, Manuel N. *Interposición de los recursos penales*. "Jurisprudencia argentina", núm. 4154, 14 de noviembre 1972, pp. 2-12, Buenos Aires, Argentina.

El presente estudio persigue como finalidad ofrecer una exposición a nivel dogmático, de un aspecto relativo a la mecánica de los recursos. Concretamente, se refiere a sus condiciones genéricas de interposición.

Si bien, señala el autor, el tema propuesto no resulta de difícil tratamiento, la entrada en vigor, desde el 1º de marzo de 1971, del nuevo Código de Procedimientos criminales para la Provincia de Córdoba ha generado problemas de interpretación en torno a la exigencia contenida en la última parte del artículo 471, o sea la que se refiere a la indicación específica que debe hacer el recurrente de los puntos de la decisión que fueren impugnados. A indagar sus antecedentes, desentrañar su sentido y captar sus alcances están dirigidos los esfuerzos del autor.

Tomando en cuenta que el desarrollo de la institución de los recursos presenta para su análisis tres aspectos fundamentales a saber: el poder de recurrir, el acto de interposición del recurso y el trámite del mismo, el autor centra su exposición en el examen del segundo de dichos aspectos, enfocando el problema a través de su concepto, caracteres, condiciones de interposición, requisitos formales y contenido.—Jesús RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *A execução para prestação de fato do direito português e a reforma do processo civil brasileiro*. "Juridica", año XVII, núm. 116, enero-marzo, 1972, pp. 116-129. Brasilia, Brasil.

Se trata de un viejo problema que a través de los siglos ha desafiado a juristas y legisladores. Buena parte de las dificultades estribó en la distinción basada en la índole fungible o no fungible de la actividad. Es obvio que en algunas hipótesis los intereses del acreedor se satisfacerían mediante la prestación por el propio deudor, cuyas cualidades personales se había tenido en cuenta como razón determinante de la formación del vínculo obligacional, en tanto que en otras ocasiones lo importante sería el resultado que se podría alcanzar por la prestación de cualquiera otra persona. Los ordenamientos contemporáneos suelen regular de manera diversa los dos grupos de hipótesis: la condena a realizar una actividad infun-

gible se convierte en ejecución específica; y si se trata de actividad fungible existe el medio de hacer que se efectúe la prestación por otro a costa del deudor, sin que se excluya la posibilidad de optar por la indemnización pura y simple. Las dificultades que todo ello trae consigo, fueron ponderadas por la comisión revisora del régimen portugués y se llegó a la conclusión de atribuir al propio acreedor la preferencia por la ejecución específica, la realización de la obra o servicio por sí o por tercero escogido por él mismo, y que hará el trabajo bajo su dirección y vigilancia. Como líneas maestras, Barbosa indica que, fijado por el juez, previo avalúo, el costo probable de la obra o del servicio, se pignorarán los bienes del deudor, bastantes para soportar los gastos, prosiguiéndose en los términos de la ejecución por cuantía cierta. Esa ejecución tiende a ofrecer los recursos financieros para costear el trabajo; para el ejecutante, todavía será posible optar entre dos actitudes: o esperará el plazo de la ejecución pecuniaria, recibiendo el producto para emplearlo en la realización del hecho, o adelantará las cantidades necesarias para reembolsarse posteriormente. Tócale, en todo caso, hacer o mandar hacer por tercero, sometido a su dirección y vigilancia, la obra o servicio. Tendrá, como es obvio, que presentar cuentas al juez, sujetas siempre al examen y a la eventual impugnación del deudor. Como se ve, el mismo esquema fundamental del código portugués tiende a establecer una nítida distinción entre las dos hipótesis, cada cual con una disciplina autónomamente fijada. El anteproyecto Buzaid muestra en más de una ocasión señales inconfundibles de que su autor ha abrevado en las fuentes de allende el mar. En esta materia, en que se había optado por diversa orientación, ha sido la Comisión Revisora, o al menos dos de sus eminentes miembros, la que ha sugerido la adopción de la figura portuguesa. Si se acoge, se tendrá una importante contribución del derecho lusitano en la reforma del proceso brasileño. Sólo es pertinente recordar que la dicha comisión ha estado formada por Hely López Meirelles, Machado Guimarães y Luis Antonio de Andrade, siendo los últimos dos los que han apoyado el punto de vista que se comenta.—Humberto BRISEÑO SIERRA.

BATTIFOL. *L'improvisation de nouvelles règles de conflit...* v. DERECHO CIVIL.

BRICEÑO VÁZQUEZ, Carlos. *El proceso penal, las cortes juveniles y el sistema penitenciario en los Estados Unidos de Norteamérica*. "Revista del Ministerio Público", núm. 4, 1968, pp. 15-31, Caracas, Venezuela.

En este brevísimo artículo, cuyo simple título sugiere la posibilidad de elaboración de por lo menos tres estudios monográficos particulares, el autor no podía más que ofrecernos un análisis bastante esquemático de temas tan amplios como complejos.

De esta forma el autor expone los antecedentes históricos del derecho procesal penal norteamericano y sus fuentes, así como los sistemas existentes y la competencia de los tribunales federales y estatales; cita los órganos que intervienen en

el proceso penal y examina las diversas fases de éste, desde la detención del indiciado hasta la sentencia y su apelación.

En cuanto a la sentencia, el autor hace hincapié en el gran poder discrecional de los jueces para administrar las penas, destacando igualmente la gran influencia del jurado en la sentencia, sea en la fijación de la pena y aún en la conmutación de la pena de muerte por condenas a prisión perpetua.

Posteriormente menciona las leyes en que se basan los jueces federales para dictar sentencia, finalizando refiriéndose tanto a la apelación de ésta como al recurso ante la Corte Suprema, cuando ha sido agotado el recurso de apelación ante una Corte estatal.—Jesús RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ.

KAHANE. *La libération conditionnelle dans le droit pénal...* v. DERECHO PENAL.

PRILICK. *El recurso de inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe.* v. DERECHO CONSTITUCIONAL.

TEORÍA GENERAL Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

COMPOR TI, Marco. *Formalismo e realismo in tema di diritto soggettivo.* "Rivista di Diritto Civile", año XVI, núm. 5, septiembre-octubre, 1970, pp. 435-482, Padua, Italia.

Trátase de la aportación del autor —profesor invitado en la Universidad de Siena (Italia)— para los *Scritti in onore di Franceso Santoro-Passarelli*. El profesor Comporti establece como premisa la necesidad de un enfoque historicista sobre la naturaleza del "derecho subjetivo", que se aparte un tanto del abstraccionismo conceptual. Las diversas concepciones que acerca de dicha noción se han formulado, no han sido sino "el reflejo de las ideologías sociales, políticas y culturales, dominantes en una determinada época". Habiendo pasado inadvertida dicha figura jurídica para los juristas romanos, por su tendencia procesalista y práctica en la regulación jurídica de las relaciones humanas, el concepto de derecho subjetivo es puesto en cambio de relieve por el jusnaturalismo, de raíz individualista, preocupado en la determinación de los *derechos innatos*, esenciales a la persona humana, que son la materia de aquella regulación (derecho objetivo), la cual no tiene otro sentido que reconocer esos derechos como algo ya existente y tutelarlos frente a los excesos de la autoridad del soberano; desde este punto de vista, el derecho subjetivo aparece, pues, como "una potestad o señorío de la voluntad" del individuo, base y razón de ser de todo sistema jurídico.

Señala Comporti que, posteriormente, un cambio de orientación ideológica que desplazó el interés desde el individuo hacia la sociedad —positivismo y sociología— volviendo la atención a los aspectos objetivos del tema, vino a destacar el *bien* o *interés jurídico* protegido, de lo cual constituye ejemplo clásico la